

El SIP continúa con su ciclo de debate sobre América Latina. La cuarta sesión estuvo dedicada a la seguridad y las fracturas de la violencia, con la participación de los profesores de Relaciones Internacionales Érika Rodríguez Pinzón y Karlos Pérez de Armiño.
Texto: **Paula Figols, miembro del SIP**

ÉRIKA RODRÍGUEZ «Las mujeres migrantes sufren más la violencia»

¿Por qué América Latina es el continente más inseguro del mundo?

América Latina es el continente, sin guerras formales, más inseguro. Tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. La inseguridad es una preocupación constante para los ciudadanos, no solo por la violencia, sino también por el riesgo de ser víctima de delitos y la impunidad ante los mismos por la debilidad de los Estados de Derecho. El crimen organizado es uno de los grandes generadores de inseguridad. Se aprovecha de los vacíos que dejan los Estados, por la corrupción, la impunidad y la captura del Estado por intereses privados. Tampoco se puede perder de vista las otras violencias estructurales y simbólicas: aquellas que criminalizan a los pobres, a los jóvenes de sectores marginales, a los migrantes...

¿Cómo ha afectado la pandemia a la violencia contra las mujeres?

La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres. Los confinamientos las han dejado a merced de los maltratadores. Además, han tenido que

asumir mayor carga de cuidados y sufren la parte más dura de la crisis económica en pérdida de empleos y empobrecimiento.

La muerte de una mujer salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar, recientemente a manos de la policía en México recuerda al caso de George Floyd. ¿Las mujeres migrantes sufren especialmente la violencia?

Sí, las mujeres migrantes son en mayor medida víctimas de la violencia física, sexual y simbólica. Sufren una gran indefensión por la securitización del tratamiento de la migración y la acción de las redes criminales. El porcentaje de mujeres y niñas migrantes venezolanas violentadas sexualmente y en situación de explotación sexual es altísimo. El caso de Victoria es un ejemplo, recientemente también hemos visto el de la madre del niño nicaragüense encontrado solo en el desierto en EE. UU. Ella fue víctima de maltrato y secuestro. La situación es muy grave, una autentica emergencia humanitaria que los gobiernos no están atendiendo.



Érika Rodríguez Pinzón. Socióloga y doctora en Relaciones Internacionales. Profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas. Ha trabajado en programas de cooperación y como consultora para organizaciones internacionales.

SIP

Las políticas de mano dura tienen apoyo popular, ¿pero son eficaces para combatir la violencia?

No. Las cárceles en América Latina están llenas, totalmente sobrepasadas en

su capacidad y la inseguridad sigue igual. Se han tipificado más duramente algunos delitos, pero no se ha modificado la capacidad de la justicia para actuar. Muchas personas están presas sin una condena, ni siquiera un juicio. En cambio, estas políticas hacen aún más vulnerables a algunos colectivos que son criminalizados. Así como en Madrid un partido político ha puesto en la diana a los niños que migran solos, en Bogotá se apuntan las culpas sobre los venezolanos. Esto puede desatar acciones violentas contra estas personas, es muy peligroso.

¿Vivimos cada vez más una militarización de la vida política? ¿En muchos países cuentan los militares con más confianza ciudadana que los políticos?

Sí, el problema es que los gobiernos civiles intentan aprovechar la imagen de fuerza y la confianza en los militares para asegurarse el control político. Hay un abismo entre la percepción de los militares y los policías, estos últimos mucho más desprestigiados. Esto lleva a que se atiendan de forma militarizada problemas que son esencialmente políticos, como las medidas para el control de la pandemia o la protesta social, como en El Salvador. Las Fuerzas Armadas juegan un papel muy relevante en la atención de muchos desafíos, por eso mismo, es muy importante su despolitización y su profesionalización.

KARLOS PÉREZ DE ARMIÑO: «Tenemos una deuda histórica con los indígenas»

América Latina vive ahora una época sin conflictos armados o guerras entre países. ¿Podemos decir que es una situación de paz?

Ciertamente, en la región ya no hay guerras entre países, pero en uno de ellos, Colombia, perdura un conflicto armado interno entre el Estado y varios actores armados, principalmente la guerrilla ELN y las disidencias de las ya desaparecidas FARC. En cuanto al resto de países, depende de qué entendamos por paz. Tradicionalmente se ha definido como el mero silencio de las armas, la inexistencia de guerra. Pero ya a finales de los años 60, se planteó que eso es solo una 'paz negativa' y que habría que perseguir un objetivo más amplio, la 'paz positiva'. Es decir, una paz con justicia social que exige superar no solo la violencia física, sino múltiples tipos de violencias que golpean a las poblaciones más vulnerables de América Latina, como la pobreza, la discriminación étnica, el feminicidio...

En su intervención habló de tres tipos de violencias: física, estructural y cultural.

La primera es evidente y muy visible. ¿No prestamos suficiente atención a las otras?

Son los tres tipos de violencia que definió Johan Galtung en 1969, pionero de la investigación para la paz. En efecto, la física, la que utiliza armas o causa daños directos sobre personas o bienes, es la más reconocible. Pero hay otras dos formas de violencia menos visibles. La estructural se refiere a aquellas injusticias sociales, como la pobreza o el analfabetismo, que reducen el potencial de las personas y que podrían ser evitadas. Más sutil aún es la violencia cultural, es decir, la multitud de ideas que sirven para justificar tanto la violencia física como la estructural: los discursos que ven al 'otro' como enemigo deshumanizado cuya vida carece de valor, los prejuicios racistas o sexistas.

Si los Estados no pueden garantizar la seguridad a sus habitantes en América Latina, ¿crece el negocio de la seguridad privada?

Los países latinoamericanos han sido



Karlos Pérez de Armiño. Doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. Investigador de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Experto en seguridad humana, construcción de paz y rehabilitación postbélica.

SIP

calificados como 'Estados de seguridad fragmentados', pues se concentran en proteger la actividad de las empresas y los intereses de las élites, pero desatienden la protección de la población y sus derechos. Así que, en un contexto de altos niveles de delincuencia y vio-

lencia cotidiana, las clases pudientes preservan su seguridad recurriendo a empresas privadas, un sector que ha emergido con gran fuerza y moviliza muchos recursos.

¿Una de las tareas pendientes es la defensa de los defensores de los derechos humanos y del territorio?

En países como Honduras, Colombia, México y otros, los defensores de los derechos humanos y de la conservación del territorio son objeto permanente de asesinatos, porque sus luchas entorpecen intereses ligados a la minería, las grandes infraestructuras o el narcotráfico. En Colombia, 906 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. No es mera delincuencia, es parte de una estrategia que los Estados, cuando menos, no frenan. Por ejemplo, este mismo martes ha sido asesinada en Caldoño (Colombia), una zona donde el Instituto Hegoa trabaja apoyando el proceso de paz, la gobernadora indígena Sandra Lilibana Peña. Sin duda, tenemos una deuda histórica con los indígenas, por la que deberíamos reconocer el despojo que supuso la colonización y la marginación que desde entonces sufren. Pero iría más allá: sus culturas basadas en lo comunitario y en la armonía con la naturaleza los convierten en un auténtico baluarte de la sostenibilidad medioambiental.